

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don Mauricio Chocair Triviño, abogado, por los demandantes don Ramón Nonato Anríquez Tapia, don Max Alejandro Jara Gajardo, don Víctor Miguel Olea Castro, don Bernardo Francisco Parra Rizzo, don Juan Antonio Soto Cifuentes y don Rolando Antonio Yáñez Madariaga, en autos RIT 0-1520-2024, seguidos en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, deduce recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la Ministra señora Graciela Gómez Quiral, el Ministro (s) señor Sergio Córdova Alarcón y la Fiscal Judicial señora Macarena Troncoso López, al haber incurrido en grave falta o abuso al dictar la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro por medio de la cual confirmaron aquella que declaró de oficio la caducidad de la acción por despido improcedente, citando a audiencia preparatoria respecto de las demás prestaciones demandadas.

Refieren que la falta y abuso grave se produce al confirmar la resolución que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, obviando que el ingreso de la demanda se produjo con diez minutos de desfase, lo que demuestra que el envío y transmisión de datos desde su computador a la Oficina Judicial Virtual se produjo dentro de plazo legal, pero debido a una saturación del sistema, al haberse hecho el ingreso de varias demandas a la vez, la plataforma se paralizó por varios minutos, extendiéndose más de la medianoche del último día del plazo contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo.

Agrega que la caducidad es una sanción al litigante desinteresado, esto es, aquel que no realiza las gestiones para poner en marcha el ejercicio jurisdiccional, actuando con desidia, lo que no puede decirse de su parte, debido a que inició el proceso informático para el ingreso de la demanda con anterioridad al vencimiento del plazo para interponerla, tal como fue ratificado por la mesa de ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica del Poder Judicial. Lo anterior demuestra que no permaneció en inactividad, lo que fue ratificado por la judicatura, al acoger incidentes de entorpecimiento en nueve demandadas tramitadas en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en las que se verificó el mismo problema de ingreso en el sistema computacional.

Refieren que la interpretación que realizó la judicatura la privó del derecho a obtener una respuesta jurisdiccional al conflicto de relevancia jurídica y, en definitiva, a su derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que solicitan que se acoja el recurso de queja y se haga lugar a la tramitación de la demanda de conformidad a la ley procesal.



Segundo: Que los recurridos explicaron que confirmaron la resolución de primera instancia que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, tomando en consideración los fundamentos de la resolución impugnada y, especialmente, las herramientas puestas a disposición de las partes por la Ley N° 20.86 para formular sus presentaciones, incluida la interposición de la demanda, para lo cual los letrados deben procurar contar con los medios tecnológicos necesarios y actuar con la debida diligencia, velando por que la tramitación de causas bajo esa modalidad permita el oportuno ejercicio de derechos, encontrándose previstos remedios procesales para superar los inconvenientes tecnológicos debidamente acreditados. Asimismo, que la esencia de la institución del entorpecimiento es que quien lo alegue se encuentre en una situación en la que sea imposible superar las circunstancias externas y ajenas que obstaculizan el ejercicio oportuno de sus derechos en juicio; finalmente, que de los antecedentes consta que si bien la parte demandante inició las gestiones para la interposición de la demanda el 28 de febrero de 2024, creando en la Oficina Judicial Virtual el trámite que le permitiría realizar el envío del escrito de demanda al sistema, no aparece que haya realizado gestión alguna para completarlo hasta la noche del 1 de marzo del mismo año, oportunidad en que intentó concluir la gestión ingresandola demanda con otros 31 escritos, de manera que la causa decisiva para el ingreso extemporáneo no fue un hecho ajeno a la voluntad de la parte demandante, sino su propio actuar.

Por lo anterior, creen no haber incurrido en falta ni abuso grave.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, nominado “*De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales*”, y su acápite primero, que lleva el nombre de “*Las facultades disciplinarias*”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mosquera Ruiz, Mario y Maturana Miquel, Cristian, Los recursos procesales, Editorial Jurídica, Santiago, 2010, p. 387).



En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, Santiago, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Cuarto: Que, del estudio de los antecedentes del proceso, se advierte lo siguiente:

I.- Don Ramón Nonato Anríquez Tapia, don Max Alejandro Jara Gajardo, don Víctor Miguel Olea Castro, don Bernardo Francisco Parra Riffo, don Juan Antonio Soto Cifuentes y don Rolando Antonio Yáñez Madariaga, representados por el abogado don Mauricio Chocair Triviño, dedujeron demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones en contra de la empresa Telefónica Chile Limitada, refiriendo haber sido despedidos el 20 de diciembre de 2023. La demanda aparece subida a la carpeta electrónica de la Oficina Judicial Virtual con fecha 2 de marzo de 2024, a las 00:10 horas.

II.- El 6 de marzo de 2024 la parte demandante presentó un escrito alegando entorpecimiento, fundado en que, debido a un problema de saturación del sistema y de problemas técnicos relativos a la capacidad para el ingreso de escritos en forma masiva, la demanda fue ingresada diez minutos desfasada, en circunstancias que su envío y transmisión fue anterior, razón por la cual debe entenderse que la interpuso dentro del plazo legal, cuyo vencimiento ocurrió a la medianoche del día 1 de marzo de 2024.

III.- La judicatura de instancia, previo a resolver el incidente de entorpecimiento, solicitó a los demandantes acompañar la totalidad de los documentos fundantes de su alegación, razón por la que se incorporó copia de un correo electrónico emanado de la Mesa de Ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica del Poder Judicial que informó lo siguiente respecto de la actividad del abogado de los demandantes en la Oficina Judicial Virtual (OJV) entre los días 1 y 2 de marzo de 2024:

“1.- Se ingresaron 31 demandas las que se distribuyeron entre el 1° y 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



2.- El envío para el ingreso a la OJV se registra, el primero, a las 23:55 del día 1 de marzo de 2024 y, el último, a las 00:25 del día 2 de marzo de 2024.

3.- 19 de las demandas figuran ingresadas con fecha 2 de marzo de 2024.

4.- La creación de causas fue realizada con fecha 28 y 29 de febrero de 2024.

5.- La fecha de ingreso de causas, esto es, los días 1 y 2 de marzo de 2024, la OJV no registró inconvenientes.

En cuanto al tiempo de carga de los documentos , no hay registro del tiempo que toma cargar documentos, ya que eso tiene directa relación con elementos propios del usuario, tales como velocidad de internet, características del dispositivo que utiliza el usuario, etc.”.

IV.- La judicatura de instancia declaró de oficio la caducidad de la acción por despido injustificado, señalando que “...habiéndose interpuesto la acción con fecha dos de marzo de dos mil veinticuatro, queda claro que la misma se ha deducido fuera del plazo establecido por la ley”, decisión que fue confirmada por los recurridos, por sentencia de nueve de mayo último.

Quinto: Que, para resolver la controversia jurídica planteada por los recurrentes, es necesario señalar, como punto de partida, que la caducidad es una sanción de carácter procesal que debe aplicarse al litigante que se abstiene de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados.

Tal como ha sido señalado reiteradamente por esta Corte, el objetivo de esta sanción procesal está constituido por la carga de que el titular de un derecho lo ejerza en el más breve tiempo, de modo de otorgar certeza a las relaciones jurídicas.

Sexto: Que, por otro lado, la Ley N° 20.886, que modificó el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, aplicable, entre otros, a los Tribunales de Letras del Trabajo atendido lo dispuesto en el artículo 5 de dicho cuerpo legal, estableció que el ingreso de todas las demandas y de todos los escritos debe realizarse por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que regla el Acta N° 85-2019 que esta Corte dictó al efecto.

Dicho auto acordado estableció, en su artículo 3, que la Corporación Administrativa del Poder Judicial dispondrá el funcionamiento de una Oficina Judicial Virtual, compuesta por un conjunto de servicios entregados en el portal del Internet del Poder Judicial, al que tendrán acceso las personas usuarias que previamente se identifiquen en la forma dispuesta en dicho cuerpo normativo,



especificándose en su artículo 11, a propósito del uso de la plataforma de tramitación de causas, que las personas, especialmente aquellas letradas, deberán incorporar completa y correctamente los antecedentes que son requeridos por la Oficina Judicial Virtual para una correcta tramitación de la causa, particularmente al seleccionar el tipo de procedimiento o escrito, la materia y los antecedentes de todos los litigantes involucrados. Dichos antecedentes, conjuntamente con los escritos y documentos electrónicos, deben ser ingresados en una carpeta electrónica, cuyas especificaciones técnicas de formato y tamaño son fijados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 del referido auto acordado y 29 del Código del Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, como se observa de lo dispuesto en los preceptos referidos precedentemente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.886, el ingreso de una demanda en un tribunal ordinario de justicia es un acto procesal complejo, compuesto por una serie de actuaciones digitales concatenadas entre sí, que se inician con la creación de una carpeta digital en la que se deben ingresar, para una correcta tramitación de la causa, los antecedentes relativos al tipo de procedimiento, la materia, los antecedentes de todos los litigantes involucrados, para, posteriormente y una vez creada dicha carpeta, proceder al ingreso de la demanda y de los documentos que en ella se acompañan.

Octavo: Que resulta manifiesto, conforme a lo que ha sido hasta aquí el relato de los antecedentes del proceso, que el cuestionamiento que el recurso realiza al actuar de los recurridos se encuentra destinado a desvirtuar aquel requisito en que se sustenta esta sanción procesal, relativo a calificar al demandante como un sujeto procesal inactivo, al haber interpuesto la demanda fuera del plazo contemplado en el artículo 168 del estatuto laboral.

Noveno: Que, conforme a lo que se ha venido razonando, no puede imputarse a la parte demandante una inactividad o abstención respecto de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados, pues la actividad que desplegó, descrita en la motivación cuarta, numeral III, y ratificada por la información aportada por la Mesa de Ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica, consistente en proceder a la creación en la Oficina Judicial Virtual de 31 carpetas digitales entre los días 28 y 29 de febrero de 2024, entre las que se encontraba aquella vinculada a la presente causa, iniciando en dichas fechas el ingreso al sistema de los antecedentes del tipo de procedimiento, materia y litigantes, para luego realizar el proceso de ingreso del escrito de demanda el 1 de marzo de 2024, a las 23:55 horas, muestra un accionar proclive a la realización de gestiones que suponen el



ejercicio del derecho a reclamar por la conducta del empleador determinante de la finalización de la vinculación, independiente que el proceso haya finalizado con algunos minutos de retraso.

Debe recordarse que esta sanción procesal pretende, en un caso como el de autos, otorgar certeza a las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y, específicamente, a su terminación, con el establecimiento de las subsecuentes indemnizaciones en el caso que resulten procedentes. Dentro de este concepto de certeza, la actividad del trabajador demostrativa de su interés, se evidencia por la realización de una gestión que indubitadamente suponga el ejercicio del derecho a reclamar por la conducta del empleador determinante de la finalización de la vinculación, y tal gestión no puede ser otra, acatando la disposición contenida en el inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo, que “recurrir al juzgado competente” para que ordene el pago de las indemnizaciones respectivas, lo que, en definitiva, ocurrió dentro del plazo contemplado en el precepto legal antes referido.

Décimo: Que de lo razonado fluye que, al haber iniciado el apoderado de los actores el proceso digital de creación de la carpeta digital entre los días 28 y 29 de febrero de 2024, para, posteriormente, iniciar el envío de los antecedentes a las 23:55 del día 1 de marzo del mismo año, culminando el proceso a las 00:10 del día 2 de marzo del mismo año, debe entenderse que, constituyendo el de la especie un trámite -el de ingreso de una acción- que no se agota en un solo paso, que es de carácter complejo por requerir más de una gestión en la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, han recurrido ante el tribunal respectivo dentro del plazo previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo.

En consecuencia, como la caducidad es una sanción de carácter procesal que debe aplicarse al litigante que se abstiene de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados; y en este caso, tal voluntad fue exteriorizada al iniciar el proceso de creación de la carpeta digital y el envío de la demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo, se debe colegir que no correspondía declarar la caducidad, y al no entenderlo así, los recurridos cometieron falta grave que debe ser enmendada por la presente vía.

Undécimo: Que, asimismo, no es posible soslayar que, de acuerdo al mérito de los antecedentes que se deprenen del proceso, habiéndose interpuesto 31 demandas por parte del abogado de los recurrentes el día 1 de marzo de 2024, existiendo actualmente nueve de ellas en tramitación al haberse acogido el incidente de entorpecimiento fundado en los mismos antecedentes del presente recurso, la decisión de desestimar la caducidad se encuentra en armonía con los



principios de igualdad ante la ley y el derecho de acceso a la justicia, respecto de todos aquellos trabajadores representados por el mismo apoderado.

Duodécimo: Que, por último, uno de los intereses que debe ser protegido y útil a la resolución que acá debe ser adoptada, dice relación con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, también conocido en la doctrina moderna como derecho a la tutela judicial efectiva, asegurado por el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, aunque no esté designado expresamente en su texto escrito, carecería de sentido que se hubiese esmerado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, el derecho a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico para su vigencia, esto es, *el derecho de toda persona a ser juzgada*, esto es, a presentarse ante el juez, a ocurrir ante él, sin estorbos o condiciones que se lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente.

En el actual estado de desarrollo del derecho nacional e interpretando la garantía constitucional de acceso a la justicia con un criterio finalista, amplio y garantista, cualquier limitación por vía de interpretación que obste al derecho a la tutela judicial, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Decimotercero: Que, de esta forma, la conclusión a la que arribaron los recurridos, esto es, confirmar la resolución que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, aparece que fue fruto de una interpretación que no respetó el debido proceso, en su arista referida al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que lleva a concluir que se privó a la parte demandante de la potestad de reclamar ante la sede jurisdiccional competente y en un procedimiento que le asegure la posibilidad de pedir, afirmar y probar sus pretensiones y derechos que estima vulnerados, razón por la que se acogerá el recurso de queja en los términos que se indicarán.

Lo dicho con anterioridad no libera al apoderado de la parte demandante, en casos futuros, de procurar la culminación de la totalidad del proceso de ingreso y envío de demandas y escritos en forma oportuna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se **acoge** el recurso de queja deducido por el abogado don Mauricio Chocair Triviño, por los demandantes don Ramón Nonato Anríquez Tapia, don Max Alejandro Jara Gajardo, don Víctor Miguel Olea Castro, don Bernardo Francisco Parra Riffo, don Juan Antonio Soto



Cifuentes y don Rolando Antonio Yáñez Madariaga y, en consecuencia, se dejan sin efecto las sentencias de veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el ingreso N° 956-2024 y aquella dictada con fecha trece de marzo último por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, en los autos Rol O-1520-2024, en cuanto declararon la caducidad de la acción de despido injustificado presentada, y en su lugar **se dispone** que el tribunal de la instancia dará curso a la tramitación de la demanda deducida, de conformidad al procedimiento establecido por la ley.

Acordada con el **voto en contra** de los ministros **Sr. Carroza y Sr. Simpértigue**, quienes estuvieron por desestimar el recurso de queja, teniendo únicamente presente que no aparece evidenciada la falta o abuso que se invoca y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, el recurso gira en torno a la valoración que la judicatura del fondo realizó respecto del artículo 168 del Código del Trabajo en relación con las normas de la Ley N° 20.886, cuestión que no es susceptible de ser atacada a través de esta vía, pues, tal como se ha dicho reiteradamente, el proceso de valoración probatoria e interpretación de la ley que llevan a cabo los tribunales de justicia en cumplimiento de su cometido, no es susceptible de ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de éstos, a menos que en dicho proceso se advierta, de forma manifiesta, un razonamiento abusivo o que atente contra las reglas del buen uso de la razón en la construcción de los argumentos interpretativos, lo que no se verifica en la especie.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Tribunal Pleno, por tratarse de un asunto en que la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que lo amerite.

Regístrese, comuníquese y hecho, archívese.

N° 19.107-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Mario Carroza E., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpértigue L., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G. No firman los ministros señora Gajardo y señor Simpértigue, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos con permiso. Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.



MARIO RONALDO CARROZA
ESPINOSA
MINISTRO
Fecha: 17/09/2024 12:25:57

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/09/2024 12:20:56

FABIOLA ESTHER LATHROP GOMEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/09/2024 12:23:27



XHXUXQXGJLX

En Santiago, a diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don Mauricio Chocair Triviño, abogado, por los demandantes don Juan José Díaz Ochoa y don José Luis Ibarra Santibáñez, en autos RIT 0-1527-2024, seguidos en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, deduce recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros señores Jaime Balmaceda Errázuriz y Alejandro Aguilar Brevis y la Ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia, al haber incurrido en grave falta o abuso al dictar la resolución de cuatro de junio de dos mil veinticuatro por medio de la cual confirmaron aquella que declaró de oficio la caducidad de la acción por despido improcedente, citando a audiencia preparatoria respecto de las demás prestaciones demandadas.

Refieren que la falta y abuso grave se produce al confirmar la resolución que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, obviando que el ingreso de la demanda se produjo con un desfase de veinticinco minutos y cincuenta y ocho segundos, lo que demuestra que el envío y transmisión de datos desde su computador a la Oficina Judicial Virtual se produjo dentro de plazo legal, pero debido a una saturación del sistema, al haberse hecho el ingreso de varias demandas a la vez, la plataforma se paralizó por varios minutos, extendiéndose más de la medianoche del último día del plazo contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo.

Agrega que la caducidad es una sanción al litigante desinteresado, esto es, aquel que no realiza las gestiones para poner en marcha el ejercicio jurisdiccional, actuando con desidia, lo que no puede decirse de su parte, debido a que inició el proceso informático para el ingreso de la demanda con anterioridad al vencimiento del plazo para interponerla, tal como fue ratificado por la mesa de ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica del Poder Judicial. Lo anterior demuestra que no permaneció en inactividad, lo que fue ratificado por la judicatura, al acoger incidentes de entorpecimiento en nueve demandadas tramitadas en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en las que se verificó el mismo problema de ingreso en el sistema computacional.

Refieren que la interpretación que realizó la judicatura la privó del derecho a obtener una respuesta jurisdiccional al conflicto de relevancia jurídica y, en definitiva, a su derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que solicitan que se acoja el recurso de queja y se haga lugar a la tramitación de la demanda de conformidad a la ley procesal.

Segundo: Que los recurridos explicaron que confirmaron la resolución de primera instancia que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado,



tomando en consideración los fundamentos de la resolución impugnada y, especialmente, que entre la fecha de apertura de la carpeta virtual el 28 de febrero de 2024 y aquella en que fue subida al sistema, periodo que se extiende por más de dos días completos, no aconteció algún suceso o evento que permita justificar que esta última actuación se hubiese verificado una vez vencido el término que prevé el artículo 168 del estatuto laboral, por lo que no cabe sino coincidir con el criterio del tribunal a quo que consideró extemporánea la presentación de la demanda.

Por lo anterior, creen no haber incurrido en falta ni abuso grave.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, nominado “*De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales*”, y su acápite primero, que lleva el nombre de “*Las facultades disciplinarias*”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mosquera Ruiz, Mario y Maturana Miquel, Cristián, Los recursos procesales, Editorial Jurídica, Santiago, 2010, p. 387).

En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, Santiago, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Cuarto: Que, del estudio de los antecedentes del proceso, se advierte lo siguiente:



I.-Don Juan José Díaz Ochoa y don José Luis Ibarra Santibáñez, representados por el abogado don Mauricio Chocair Triviño, dedujeron demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones en contra de la empresa Telefónica Chile Limitada, refiriendo haber sido despedidos el 20 de diciembre de 2023. La demanda aparece subida a la carpeta electrónica de la Oficina Judicial Virtual con fecha 2 de marzo de 2024, a las 00:25:58 horas.

II.- El 6 de marzo de 2024 la parte demandante presentó un escrito alegando entorpecimiento, fundado en que, debido a un problema de saturación del sistema y de problemas técnicos relativos a la capacidad para el ingreso de escritos en forma masiva, la demanda fue ingresada veinticinco minutos y cincuenta y ocho segundos desfasada, en circunstancias que su envío y transmisión fue anterior, razón por la cual debe entenderse que la interpuso dentro del plazo legal, cuyo vencimiento ocurrió a la medianoche del día 1 de marzo de 2024.

III.- La judicatura de instancia, previo a resolver el incidente de entorpecimiento, solicitó a los demandantes acompañar la totalidad de los documentos fundantes de su alegación, razón por la que se incorporó copia de un correo electrónico emanado de la Mesa de Ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica del Poder Judicial que informó lo siguiente respecto de la actividad del abogado de los demandantes en la Oficina Judicial Virtual (OJV) entre los días 1 y 2 de marzo de 2024:

“1.- Se ingresaron 31 demandas las que se distribuyeron entre el 1° y 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

2.- El envío para el ingreso a la OJV se registra, el primero, a las 23:55 del día 1 de marzo de 2024 y, el último, a las 00:25 del día 2 de marzo de 2024.

3.- 19 de las demandas figuran ingresadas con fecha 2 de marzo de 2024.

4.- La creación de causas fue realizada con fecha 28 y 29 de febrero de 2024.

5.- La fecha de ingreso de causas, esto es, los días 1 y 2 de marzo de 2024, la OJV no registró inconvenientes.

En cuanto al tiempo de carga de los documentos , no hay registro del tiempo que toma cargar documentos, ya que eso tiene directa relación con elementos propios del usuario, tales como velocidad de internet, características del dispositivo que utiliza el usuario, etc.”.

IV.- La judicatura de instancia declaró de oficio la caducidad de la acción por despido injustificado, señalando que *“...habiéndose interpuesto la acción con fecha dos de marzo de dos mil veinticuatro, queda claro que la misma se ha*



deducido fuera del plazo establecido por la ley”, decisión que fue confirmada por los recurridos, por sentencia de nueve de mayo último.

Quinto: Que para resolver la controversia jurídica planteada por los recurrentes, es necesario señalar, como punto de partida, que la caducidad es una sanción de carácter procesal que debe aplicarse al litigante que se abstiene de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados.

Tal como ha sido señalado reiteradamente por esta Corte, el objetivo de esta sanción procesal está constituido por la carga de que el titular de un derecho lo ejerza en el más breve tiempo, de modo de otorgar certeza a las relaciones jurídicas.

Sexto: Que, por otro lado, la Ley N° 20.886, que modificó el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, aplicable, entre otros, a los Tribunales de Letras del Trabajo atendido lo dispuesto en el artículo 5 de dicho cuerpo legal, estableció que el ingreso de todas las demandas y de todos los escritos debe realizarse por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que regula el Acta N° 85-2019 que esta Corte dictó al efecto.

Dicho auto acordado estableció, en su artículo 3, que la Corporación Administrativa del Poder Judicial dispondrá el funcionamiento de una Oficina Judicial Virtual, compuesta por un conjunto de servicios entregados en el portal del Internet del Poder Judicial, al que tendrán acceso las personas usuarias que previamente se identifiquen en la forma dispuesta en dicho cuerpo normativo, especificándose en su artículo 11, a propósito del uso de la plataforma de tramitación de causas, que las personas, especialmente aquellas letradas, deberán incorporar completa y correctamente los antecedentes que son requeridos por la Oficina Judicial Virtual para una correcta tramitación de la causa, particularmente al seleccionar el tipo de procedimiento o escrito, la materia y los antecedentes de todos los litigantes involucrados. Dichos antecedentes, conjuntamente con los escritos y documentos electrónicos, deben ser ingresados en una carpeta electrónica, cuyas especificaciones técnicas de formato y tamaño son fijados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 del referido auto acordado y 29 del Código del Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, como se observa de lo dispuesto en los preceptos referidos precedentemente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.886, el ingreso de una demanda en un tribunal ordinario de justicia es un acto procesal



complejo, compuesto por una serie de actuaciones digitales concatenadas entre sí, que se inician con la creación de una carpeta digital en la que se deben ingresar, para una correcta tramitación de la causa, los antecedentes relativos al tipo de procedimiento, la materia, los antecedentes de todos los litigantes involucrados, para, posteriormente y una vez creada dicha carpeta, proceder al ingreso de la demanda y de los documentos que en ella se acompañan.

Octavo: Que resulta manifiesto, conforme a lo que ha sido hasta aquí el relato de los antecedentes del proceso, que el cuestionamiento que el recurso realiza al actuar de los recurridos se encuentra destinado a desvirtuar aquel requisito en que se sustenta esta sanción procesal, relativo a calificar al demandante como un sujeto procesal inactivo, al haber interpuesto la demanda fuera del plazo contemplado en el artículo 168 del estatuto laboral.

Noveno: Que, conforme a lo que se ha venido razonando, no puede imputarse a la parte demandante una inactividad o abstención respecto de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados, pues la actividad que desplegó, descrita en la motivación cuarta, numeral III, y ratificada por la información aportada por la Mesa de Ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica, consistente en proceder a la creación en la Oficina Judicial Virtual de 31 carpetas digitales entre los días 28 y 29 de febrero de 2024, entre las que se encontraba aquella vinculada a la presente causa, iniciando en dichas fechas el ingreso al sistema de los antecedentes del tipo de procedimiento, materia y litigantes, para luego realizar el proceso de ingreso del escrito de demanda el 1 de marzo de 2024, a las 23:55 horas, muestra un accionar proclive a la realización de gestiones que suponen el ejercicio del derecho a reclamar por la conducta del empleador determinante de la finalización de la vinculación, independiente que el proceso haya finalizado con algunos minutos de retraso.

Debe recordarse que esta sanción procesal pretende, en un caso como el de autos, otorgar certeza a las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y, específicamente, a su terminación, con el establecimiento de las subsecuentes indemnizaciones en el caso que resulten procedentes. Dentro de este concepto de certeza, la actividad del trabajador demostrativa de su interés, se evidencia por la realización de una gestión que indubitadamente suponga el ejercicio del derecho a reclamar por la conducta del empleador determinante de la finalización de la vinculación, y tal gestión no puede ser otra, acatando la disposición contenida en el inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo, que “recorrir al juzgado competente” para que ordene el pago de las



indemnizaciones respectivas, lo que, en definitiva, ocurrió dentro del plazo contemplado en el precepto legal antes referido.

Décimo: Que de lo razonado fluye que, al haber iniciado el apoderado de los actores el proceso digital de creación de la carpeta digital entre los días 28 y 29 de febrero de 2024, para, posteriormente, iniciar el envío de los antecedentes a las 23:55 del día 1 de marzo del mismo año, culminando el proceso a las 00:25:58 del día 2 de marzo del mismo año, debe entenderse que, constituyendo el de la especie un trámite -el de ingreso de una acción- que no se agota en un solo paso, que es de carácter complejo por requerir más de una gestión en la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, han recurrido ante el tribunal respectivo dentro del plazo previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo.

En consecuencia, como la caducidad es una sanción de carácter procesal que debe aplicarse al litigante que se abstiene de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados; y en este caso, tal voluntad fue exteriorizada al iniciar el proceso de creación de la carpeta digital y el envío de la demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo, se debe colegir que no correspondía declarar la caducidad, y al no entenderlo así, los recurridos cometieron falta grave que debe ser enmendada por la presente vía.

Undécimo: Que, asimismo, no es posible soslayar que, de acuerdo al mérito de los antecedentes que se deprenden del proceso, habiéndose interpuesto 31 demandas por parte del abogado de los recurrentes el día 1 de marzo de 2024, existiendo actualmente nueve de ellas en tramitación al haberse acogido el incidente de entorpecimiento fundado en los mismos antecedentes del presente recurso, la decisión de desestimar la caducidad se encuentra en armonía con los principios de igualdad ante la ley y el derecho de acceso a la justicia, respecto de todos aquellos trabajadores representados por el mismo apoderado.

Duodécimo: Que, por último, uno de los intereses que debe ser protegido y útil a la resolución que acá debe ser adoptada, dice relación con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, también conocido en la doctrina moderna como derecho a la tutela judicial efectiva, asegurado por el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, aunque no esté designado expresamente en su texto escrito, carecería de sentido que se hubiese esmerado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, el derecho a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico para su vigencia, esto es, *el derecho de toda persona*



a ser juzgada, esto es, a presentarse ante el juez, a ocurrir ante él, sin estorbos o condiciones que se lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente.

En el actual estado de desarrollo del derecho nacional e interpretando la garantía constitucional de acceso a la justicia con un criterio finalista, amplio y garantista, cualquier limitación por vía de interpretación que obste al derecho a la tutela judicial, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Decimotercero: Que, de esta forma, la conclusión a la que arribaron los recurridos, esto es, confirmar la resolución que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, aparece que fue fruto de una interpretación que no respetó el debido proceso, en su arista referida al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que lleva a concluir que se privó a la parte demandante de la potestad de reclamar ante la sede jurisdiccional competente y en un procedimiento que le asegure la posibilidad de pedir, afirmar y probar sus pretensiones y derechos que estima vulnerados, razón por la que se acogerá el recurso de queja en los términos que se indicarán.

Lo dicho con anterioridad no libera al apoderado de la parte demandante, en casos futuros, de procurar la culminación de la totalidad del proceso de ingreso y envío de demandas y escritos en forma oportuna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se **acoge** el recurso de queja deducido por el abogado don Mauricio Chocair Triviño, por los demandantes Juan José Díaz Ochoa y don José Luis Ibarra Santibáñez y, en consecuencia, se dejan sin efecto las sentencias de cuatro de junio de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el ingreso N° 1077-2024 y aquella dictada con fecha quince de marzo último por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, en los autos Rol O-1527-2024, en cuanto declararon la caducidad de la acción de despido injustificado presentada, y en su lugar **se dispone** que el tribunal de la instancia dará curso a la tramitación de la demanda deducida, de conformidad al procedimiento establecido por la ley.

Acordada con el **voto en contra** de los ministros **Sr. Carroza y Sr. Simpértigue**, quienes estuvieron por desestimar el recurso de queja, teniendo únicamente presente que no aparece evidenciada la falta o abuso que se invoca y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, el recurso gira en torno a la valoración que la judicatura del fondo realizó respecto del artículo 168 del Código del Trabajo en relación con las normas



de la Ley N° 20.886, cuestión que no es susceptible de ser atacada a través de esta vía, pues, tal como se ha dicho reiteradamente, el proceso de valoración probatoria e interpretación de la ley que llevan a cabo los tribunales de justicia en cumplimiento de su cometido, no es susceptible de ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de éstos, a menos que en dicho proceso se advierta, de forma manifiesta, un razonamiento abusivo o que atente contra las reglas del buen uso de la razón en la construcción de los argumentos interpretativos, lo que no se verifica en la especie.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Tribunal Pleno, por tratarse de un asunto en que la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que lo amerite.

Regístrese, comuníquese y hecho, archívese.

N° 19.739-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Mario Carroza E., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G. No firman los ministros señora Gajardo y señor Simpertigue, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos con permiso. Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

MARIO RONALDO CARROZA
ESPINOSA
MINISTRO
Fecha: 17/09/2024 12:25:59

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/09/2024 12:20:59

FABIOLA ESTHER LATHROP GOMEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/09/2024 12:23:30



En Santiago, a diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don Mauricio Chocair Triviño, abogado, por los demandantes don Ricardo Hernández Osses, don Isaías Moreno Núñez, don Fernando Orellana Candia, don Manuel Tessada Valenzuela y don Abraham Varas Concha, en autos RIT 0-1518-2024, seguidos en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, deduce recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la Ministra señora Romy Rutherford Parentti, el Ministro (s) señor Sergio Córdova Alarcón y la abogada integrante señora Sara Moreno Fernández, al haber incurrido en grave falta o abuso al dictar la resolución de nueve de mayo de dos mil veinticuatro por medio de la cual confirmaron aquella que declaró de oficio la caducidad de la acción por despido improcedente, citando a audiencia preparatoria respecto de las demás prestaciones demandadas.

Refieren que la falta y abuso grave se produce al confirmar la resolución que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, obviando que el ingreso de la demanda se produjo con dos minutos y treinta y cuatro segundos de desfase, lo que demuestra que el envío y transmisión de datos desde su computador a la Oficina Judicial Virtual se produjo dentro de plazo legal, pero debido a una saturación del sistema, al haberse hecho el ingreso de varias demandas a la vez, la plataforma se paralizó por varios minutos, extendiéndose más de la medianoche del último día del plazo contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo.

Agrega que la caducidad es una sanción al litigante desinteresado, esto es, aquel que no realiza las gestiones para poner en marcha el ejercicio jurisdiccional, actuando con desidia, lo que no puede decirse de su parte, debido a que inició el proceso informático para el ingreso de la demanda con anterioridad al vencimiento del plazo para interponerla, tal como fue ratificado por la mesa de ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica del Poder Judicial. Lo anterior demuestra que no permaneció en inactividad, lo que fue ratificado por la judicatura, al acoger incidentes de entorpecimiento en nueve demandadas tramitadas en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en las que se verificó el mismo problema de ingreso en el sistema computacional.

Refieren que la interpretación que realizó la judicatura la privó del derecho a obtener una respuesta jurisdiccional al conflicto de relevancia jurídica y, en definitiva, a su derecho a la tutela judicial efectiva, 'por lo que solicitan que se acoja el recurso de queja y se haga lugar a la tramitación de la demanda de conformidad a la ley procesal.



Segundo: Que los recurridos explicaron que confirmaron la resolución de primera instancia que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, tomando en consideración los fundamentos de la resolución impugnada y, especialmente, que de la información obtenida por la mesa de ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica del Poder Judicial, el abogado de los recurrentes creó las carpetas en la plataforma de la Oficina Judicial Virtual con fecha 28 y 29 de febrero de 2024, pero que las demandas fueron ingresadas entre el 1 de marzo de 2024 a las 23:55 horas y el 2 de marzo del mismo año a las 00:25 horas. Asimismo, se tuvo presente que el plazo contemplado en el artículo 168 del estatuto laboral es un plazo legal y no judicial, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Civil, la demanda debe ser interpuesta antes de la medianoche en que termina el plazo, razón por la cual, atendido lo previsto en el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, la posibilidad de ejercer el derecho se entiende extinguida al vencimiento del referido plazo, no resultando realista intentar ingresar varias demandas simultáneamente, lo que implica una falta de cuidado, propio de la desidia que sanciona la sanción de caducidad.

Por lo anterior, creen no haber incurrido en falta ni abuso grave.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, nominado “*De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales*”, y su acápite primero, que lleva el nombre de “*Las facultades disciplinarias*”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mosquera Ruiz, Mario y Maturana Miquel, Cristian, Los recursos procesales, Editorial Jurídica, Santiago, 2010, p. 387).

En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que



la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, Santiago, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Cuarto: Que, del estudio de los antecedentes del proceso, se advierte lo siguiente:

I.-Don Ricardo Hernández Osses, don Isaías Moreno Núñez, don Fernando Orellana Candia, don Manuel Tessada Valenzuela y don Abraham Varas Concha, representados por el abogado don Mauricio Chocair Triviño, dedujeron demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones en contra de la empresa Telefónica Chile Limitada, refiriendo haber sido despedidos el 20 de diciembre de 2023. La demanda aparece subida a la carpeta electrónica de la Oficina Judicial Virtual con fecha 2 de marzo de 2024, a las 00:02:34 horas.

II.- El 6 de marzo de 2024 la parte demandante presentó un escrito alegando entorpecimiento, fundado en que, debido a un problema de saturación del sistema y de problemas técnicos relativos a la capacidad para el ingreso de escritos en forma masiva, la demanda fue ingresada con dos minutos y treinta y cuatro segundo desfasada, en circunstancias que su envío y transmisión fue anterior, razón por la cual debe entenderse que la interpuso dentro del plazo legal, cuyo vencimiento ocurrió a la medianoche del día 1 de marzo de 2024.

III.- La judicatura de instancia, previo a resolver el incidente de entorpecimiento, solicitó a los demandantes acompañar la totalidad de los documentos fundantes de su alegación, razón por la que se incorporó copia de un correo electrónico emanado de la Mesa de Ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica del Poder Judicial que informó lo siguiente respecto de la actividad del abogado de los demandantes en la Oficina Judicial Virtual (OJV) entre los días 1 y 2 de marzo de 2024:

“1.- Se ingresaron 31 demandas las que se distribuyeron entre el 1° y 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

2.- El envío para el ingreso a la OJV se registra, el primero, a las 23:55 del día 1 de marzo de 2024 y, el último, a las 00:25 del día 2 de marzo de 2024.

3.- 19 de las demandas figuran ingresadas con fecha 2 de marzo de 2024.

4.- La creación de causas fue realizada con fecha 28 y 29 de febrero de 2024.

5.- La fecha de ingreso de causas, esto es, los días 1 y 2 de marzo de 2024, la OJV no registró inconvenientes.



En cuanto al tiempo de carga de los documentos , no hay registro del tiempo que toma cargar documentos, ya que eso tiene directa relación con elementos propios del usuario, tales como velocidad de internet, características del dispositivo que utiliza el usuario, etc.”.

IV.- La judicatura de instancia declaró de oficio la caducidad de la acción por despido injustificado, señalando que “...*habiéndose interpuesto la acción con fecha dos de marzo de dos mil veinticuatro, queda claro que la misma se ha deducido fuera del plazo establecido por la ley*”, decisión que fue confirmada por los recurridos, por sentencia de nueve de mayo último.

Quinto: Que, para resolver la controversia jurídica planteada por los recurrentes, es necesario señalar, como punto de partida, que la caducidad es una sanción de carácter procesal que debe aplicarse al litigante que se abstiene de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados.

Tal como ha sido señalado reiteradamente por esta Corte, el objetivo de esta sanción procesal está constituido por la carga de que el titular de un derecho lo ejerza en el más breve tiempo, de modo de otorgar certeza a las relaciones jurídicas.

Sexto: Que, por otro lado, la Ley N° 20.886, que modificó el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, aplicable, entre otros, a los Tribunales de Letras del Trabajo atendido lo dispuesto en el artículo 5 de dicho cuerpo legal, estableció que el ingreso de todas las demandas y de todos los escritos debe realizarse por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que regla el Acta N° 85-2019 que esta Corte dictó al efecto.

Dicho auto acordado estableció, en su artículo 3, que la Corporación Administrativa del Poder Judicial dispondrá el funcionamiento de una Oficina Judicial Virtual, compuesta por un conjunto de servicios entregados en el portal del Internet del Poder Judicial, al que tendrán acceso las personas usuarias que previamente se identifiquen en la forma dispuesta en dicho cuerpo normativo, especificándose en su artículo 11, a propósito del uso de la plataforma de tramitación de causas, que las personas, especialmente aquellas letradas, deberán incorporar completa y correctamente los antecedentes que son requeridos por la Oficina Judicial Virtual para una correcta tramitación de la causa, particularmente al seleccionar el tipo de procedimiento o escrito, la materia y los antecedentes de todos los litigantes involucrados. Dichos antecedentes, conjuntamente con los escritos y documentos electrónicos, deben ser ingresados



en una carpeta electrónica, cuyas especificaciones técnicas de formato y tamaño son fijados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 del referido auto acordado y 29 del Código del Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, como se observa de lo dispuesto en los preceptos referidos precedentemente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.886, el ingreso de una demanda en un tribunal ordinario de justicia es un acto procesal complejo, compuesto por una serie de actuaciones digitales concatenadas entre sí, que se inician con la creación de una carpeta digital en la que se deben ingresar, para una correcta tramitación de la causa, los antecedentes relativos al tipo de procedimiento, la materia, los antecedentes de todos los litigantes involucrados, para, posteriormente y una vez creada dicha carpeta, proceder al ingreso de la demanda y de los documentos que en ella se acompañan.

Octavo: Que resulta manifiesto, conforme a lo que ha sido hasta aquí el relato de los antecedentes del proceso, que el cuestionamiento que el recurso realiza al actuar de los recurridos se encuentra destinado a desvirtuar aquel requisito en que se sustenta esta sanción procesal, relativo a calificar al demandante como un sujeto procesal inactivo, al haber interpuesto la demanda fuera del plazo contemplado en el artículo 168 del estatuto laboral.

Noveno: Que, conforme a lo que se ha venido razonando, no puede imputarse a la parte demandante una inactividad o abstención respecto de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados, pues la actividad que desplegó, descrita en la motivación cuarta, numeral III, y ratificada por la información aportada por la Mesa de Ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica, consistente en proceder a la creación en la Oficina Judicial Virtual de 31 carpetas digitales entre los días 28 y 29 de febrero de 2024, entre las que se encontraba aquella vinculada a la presente causa, iniciando en dichas fechas el ingreso al sistema de los antecedentes del tipo de procedimiento, materia y litigantes, para luego realizar el proceso de ingreso del escrito de demanda el 1 de marzo de 2024, a las 23:55 horas, muestra un accionar proclive a la realización de gestiones que suponen el ejercicio del derecho a reclamar por la conducta del empleador determinante de la finalización de la vinculación, independiente que el proceso haya finalizado con algunos minutos de retraso.

Debe recordarse que esta sanción procesal pretende, en un caso como el de autos, otorgar certeza a las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y, específicamente, a su terminación, con el establecimiento de las subsecuentes indemnizaciones en el caso que resulten procedentes. Dentro de



este concepto de certeza, la actividad del trabajador demostrativa de su interés, se evidencia por la realización de una gestión que indubitadamente suponga el ejercicio del derecho a reclamar por la conducta del empleador determinante de la finalización de la vinculación, y tal gestión no puede ser otra, acatando la disposición contenida en el inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo, que “recurrir al juzgado competente” para que ordene el pago de las indemnizaciones respectivas, lo que, en definitiva, ocurrió dentro del plazo contemplado en el precepto legal antes referido.

Décimo: Que de lo razonado fluye que, al haber iniciado el apoderado de los actores el proceso digital de creación de la carpeta digital entre los días 28 y 29 de febrero de 2024, para, posteriormente, iniciar el envío de los antecedentes a las 23:55 del día 1 de marzo del mismo año, culminando el proceso a las 00:02:34 del día 2 de marzo del mismo año, debe entenderse que, constituyendo el de la especie un trámite -el de ingreso de una acción- que no se agota en un solo paso, que es de carácter complejo por requerir más de una gestión en la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, han recurrido ante el tribunal respectivo dentro del plazo previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo.

En consecuencia, como la caducidad es una sanción de carácter procesal que debe aplicarse al litigante que se abstiene de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados; y en este caso, tal voluntad fue exteriorizada al iniciar el proceso de creación de la carpeta digital y el envío de la demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo, se debe colegir que no correspondía declarar la caducidad, y al no entenderlo así, los recurridos cometieron falta grave que debe ser enmendada por la presente vía.

Undécimo: Que, asimismo, no es posible soslayar que, de acuerdo al mérito de los antecedentes que se deprenen del proceso, habiéndose interpuesto 31 demandas por parte del abogado de los recurrentes el día 1 de marzo de 2024, existiendo actualmente nueve de ellas en tramitación al haberse acogido el incidente de entorpecimiento fundado en los mismos antecedentes del presente recurso, la decisión de desestimar la caducidad se encuentra en armonía con los principios de igualdad ante la ley y el derecho de acceso a la justicia, respecto de todos aquellos trabajadores representados por el mismo apoderado.

Duodécimo: Que, por último, uno de los intereses que debe ser protegido y útil a la resolución que acá debe ser adoptada, dice relación con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, también conocido en la doctrina moderna como derecho a la tutela judicial efectiva, asegurado por el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de



la República, pues, aunque no esté designado expresamente en su texto escrito, carecería de sentido que se hubiese esmerado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, el derecho a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico para su vigencia, esto es, *el derecho de toda persona a ser juzgada*, esto es, a presentarse ante el juez, a ocurrir ante él, sin estorbos o condiciones que se lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente.

En el actual estado de desarrollo del derecho nacional e interpretando la garantía constitucional de acceso a la justicia con un criterio finalista, amplio y garantista, cualquier limitación por vía de interpretación que obste al derecho a la tutela judicial, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Decimotercero: Que, de esta forma, la conclusión a la que arribaron los recurridos, esto es, confirmar la resolución que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, aparece que fue fruto de una interpretación que no respetó el debido proceso, en su arista referida al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que lleva a concluir que se privó a la parte demandante de la potestad de reclamar ante la sede jurisdiccional competente y en un procedimiento que le asegure la posibilidad de pedir, afirmar y probar sus pretensiones y derechos que estima vulnerados, razón por la que se acogerá el recurso de queja en los términos que se indicarán.

Lo dicho con anterioridad no libera al apoderado de la parte demandante, en casos futuros, de procurar la culminación de la totalidad del proceso de ingreso y envío de demandas y escritos en forma oportuna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se **acoge** el recurso de queja deducido por el abogado don Mauricio Chocair Triviño, por los demandantes don Ricardo Hernández Osses, don Isaías Moreno Núñez, don Fernando Orellana Candia, don Manuel Tessada Valenzuela y don Abraham Varas Concha y, en consecuencia, se dejan sin efecto las sentencias de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el ingreso N° 1046-2024 y aquella dictada con fecha quince de marzo último por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, en los autos Rol O-1518-2024, en cuanto declararon la caducidad de la acción de despido injustificado presentada, y en su lugar **se dispone** que el tribunal de la instancia dará curso a la tramitación de la demanda deducida, de conformidad al procedimiento establecido por la ley.



Acordada con el **voto en contra** de los ministros **Sr. Carroza y Sr. Simpértigue**, quienes estuvieron por desestimar el recurso de queja, teniendo únicamente presente que no aparece evidenciada la falta o abuso que se invoca y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, el recurso gira en torno a la valoración que la judicatura del fondo realizó respecto del artículo 168 del Código del Trabajo en relación con las normas de la Ley N° 20.886, cuestión que no es susceptible de ser atacada a través de esta vía, pues, tal como se ha dicho reiteradamente, el proceso de valoración probatoria e interpretación de la ley que llevan a cabo los tribunales de justicia en cumplimiento de su cometido, no es susceptible de ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de éstos, a menos que en dicho proceso se advierta, de forma manifiesta, un razonamiento abusivo o que atente contra las reglas del buen uso de la razón en la construcción de los argumentos interpretativos, lo que no se verifica en la especie.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Tribunal Pleno, por tratarse de un asunto en que la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que lo amerite.

Regístrese, comuníquese y hecho, archívese.

N° 17.223-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Mario Carroza E., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpértigue L., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G. No firman los ministros señora Gajardo y señor Simpértigue, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos con permiso. Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

MARIO RONALDO CARROZA
ESPINOSA
MINISTRO
Fecha: 17/09/2024 12:23:34

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/09/2024 12:20:55



FABIOLA ESTHER LATHROP GOMEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/09/2024 12:23:25



En Santiago, a diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don Mauricio Chocair Triviño, abogado, por el demandante don Patricio David Padilla Bernal, en autos RIT 0-1522-2024, seguidos en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, deduce recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la Ministra señora Graciela Gómez Quiral, el Ministro (s) señor Manuel Rodríguez Vega y la Fiscal Judicial señora Macarena Troncoso López, al haber incurrido en grave falta o abuso al dictar la resolución de cuatro de junio de dos mil veinticuatro por medio de la cual confirmaron aquella que declaró de oficio la caducidad de la acción por despido improcedente, citando a audiencia preparatoria respecto de las demás prestaciones demandadas.

Refieren que la falta y abuso grave se produce al confirmar la resolución que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, obviando que el ingreso de la demanda se produjo con catorce minutos y trece segundos de desfase, lo que demuestra que el envío y transmisión de datos desde su computador a la Oficina Judicial Virtual se produjo dentro de plazo legal, pero debido a una saturación del sistema, al haberse hecho el ingreso de varias demandas a la vez, la plataforma se paralizó por varios minutos, extendiéndose más de la medianoche del último día del plazo contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo.

Agrega que la caducidad es una sanción al litigante desinteresado, esto es, aquel que no realiza las gestiones para poner en marcha el ejercicio jurisdiccional, actuando con desidia, lo que no puede decirse de su parte, debido a que inició el proceso informático para el ingreso de la demanda con anterioridad al vencimiento del plazo para interponerla, tal como fue ratificado por la mesa de ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica del Poder Judicial. Lo anterior demuestra que no permaneció en inactividad, lo que fue ratificado por la judicatura, al acoger incidentes de entorpecimiento en nueve demandadas tramitadas en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en las que se verificó el mismo problema de ingreso en el sistema computacional.

Refieren que la interpretación que realizó la judicatura la privó del derecho a obtener una respuesta jurisdiccional al conflicto de relevancia jurídica y, en definitiva, a su derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que solicitan que se acoja el recurso de queja y se haga lugar a la tramitación de la demanda de conformidad a la ley procesal.

Segundo: Que los recurridos explicaron que confirmaron la resolución de primera instancia que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado,



tomando en consideración los fundamentos de la resolución impugnada y, especialmente, las herramientas puestas a disposición de las partes por la Ley N° 20.86 para formular sus presentaciones, incluida la interposición de la demanda, para lo cual los letrados deben procurar contar con los medios tecnológicos necesarios y actuar con la debida diligencia, velando porque la tramitación de causas bajo esa modalidad permita el oportuno ejercicio de derechos, encontrándose previsto remedios procesales para superar los inconvenientes tecnológicos debidamente acreditados. Asimismo, que la esencia de la institución del entorpecimiento que quien lo alegue se encuentre en una situación en la que sea imposible superar las circunstancias externas y ajenas que obstaculizan el ejercicio oportuno de sus derechos en juicio; finalmente, que de los antecedentes consta que si bien la parte demandante inició las gestiones para la interposición de la demanda el 28 de febrero de 2024, creando en la Oficina Judicial Virtual el trámite que le permitiría realizar el envío del escrito de demanda al sistema, no aparece que haya realizado gestión alguna para completarlo hasta la noche del 1 de marzo del mismo año, oportunidad en que intentó concluir la gestión ingresándola demanda con otros 31 escritos, de manera que la causa decisiva para el ingreso extemporáneo no fue un hecho ajeno a la voluntad de la parte demandante, sino su propio actuar.

Por lo anterior, creen no haber incurrido en falta ni abuso grave.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, nominado “*De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales*”, y su acápite primero, que lleva el nombre de “*Las facultades disciplinarias*”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mosquera Ruiz, Mario y Maturana Miquel, Cristian, Los recursos procesales, Editorial Jurídica, Santiago, 2010, p. 387).

En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en



la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, Santiago, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Cuarto: Que, del estudio de los antecedentes del proceso, se advierte lo siguiente:

I.- Don Patricio David Padilla Bernal, representado por el abogado don Mauricio Chocair Triviño, dedujo demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones en contra de la empresa Telefónica Chile Limitada, refiriendo haber sido despedido el 20 de diciembre de 2023. La demanda aparece subida a la carpeta electrónica de la Oficina Judicial Virtual con fecha 2 de marzo de 2024, a las 00:14:13 horas.

II.- El 6 de marzo de 2024 la parte demandante presentó un escrito alegando entorpecimiento, fundado en que, debido a un problema de saturación del sistema y de problemas técnicos relativos a la capacidad para el ingreso de escritos en forma masiva, la demanda aparece subida catorce minutos y trece segundos desfasada, en circunstancias que su envío y transmisión fue anterior, razón por la cual debe entenderse que la interpuso dentro del plazo legal, cuyo vencimiento ocurrió a la medianoche del día 1 de marzo de 2024.

III.- La judicatura de instancia, previo a resolver el incidente de entorpecimiento, solicitó a los demandantes acompañar la totalidad de los documentos fundantes de su alegación, razón por la que se incorporó copia de un correo electrónico emanado de la Mesa de Ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica del Poder Judicial que informó lo siguiente respecto de la actividad del abogado de los demandantes en la Oficina Judicial Virtual (OJV) entre los días 1 y 2 de marzo de 2024:

“1.- Se ingresaron 31 demandas las que se distribuyeron entre el 1° y 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

2.- El envío para el ingreso a la OJV se registra, el primero, a las 23:55 del día 1 de marzo de 2024 y, el último, a las 00:25 del día 2 de marzo de 2024.

3.- 19 de las demandas figuran ingresadas con fecha 2 de marzo de 2024.

4.- La creación de causas fue realizada con fecha 28 y 29 de febrero de 2024.



5.- La fecha de ingreso de causas, esto es, los días 1 y 2 de marzo de 2024, la OJV no registró inconvenientes.

En cuanto al tiempo de carga de los documentos , no hay registro del tiempo que toma cargar documentos, ya que eso tiene directa relación con elementos propios del usuario, tales como velocidad de internet, características del dispositivo que utiliza el usuario, etc.”.

IV.- La judicatura de instancia declaró de oficio la caducidad de la acción por despido injustificado, señalando que “...*habiéndose interpuesto la acción con fecha dos de marzo de dos mil veinticuatro, queda claro que la misma se ha deducido fuera del plazo establecido por la ley*”, decisión que fue confirmada por los recurridos, por sentencia de nueve de mayo último.

Quinto: Que, para resolver la controversia jurídica planteada por los recurrentes, es necesario señalar, como punto de partida, que la caducidad es una sanción de carácter procesal que debe aplicarse al litigante que se abstiene de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados.

Tal como ha sido señalado reiteradamente por esta Corte, el objetivo de esta sanción procesal está constituido por la carga de que el titular de un derecho lo ejerza en el más breve tiempo, de modo de otorgar certeza a las relaciones jurídicas.

Sexto: Que, por otro lado, la Ley N° 20.886, que modificó el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, aplicable, entre otros, a los Tribunales de Letras del Trabajo atendido lo dispuesto en el artículo 5 de dicho cuerpo legal, estableció que el ingreso de todas las demandas y de todos los escritos debe realizarse por vía electrónica a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, para cuyos efectos los abogados o habilitados en derecho se registrarán en los términos que regla en el Acta N° 85-2019 que esta Corte dictó al efecto.

Dicho auto acordado estableció, en su artículo 3, que la Corporación Administrativa del Poder Judicial dispondrá el funcionamiento de una Oficina Judicial Virtual, compuesta por un conjunto de servicios entregados en el portal del Internet del Poder Judicial, al que tendrán acceso las personas usuarias que previamente se identifiquen en la forma dispuesta en dicho cuerpo normativo, especificándose en su artículo 11, a propósito del uso de la plataforma de tramitación de causas, que las personas, especialmente aquellas letradas, deberán incorporar completa y correctamente los antecedentes que son requeridos por la Oficina Judicial Virtual para una correcta tramitación de la causa, particularmente al seleccionar el tipo de procedimiento o escrito, la materia y los



antecedentes de todos los litigantes involucrados. Dichos antecedentes, conjuntamente con los escritos y documentos electrónicos, deben ser ingresados en una carpeta electrónica, cuyas especificaciones técnicas de formato y tamaño son fijados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 del referido auto acordado y 29 del Código del Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, como se observa de lo dispuesto en los preceptos referidos precedentemente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.886, el ingreso de una demanda en un tribunal ordinario de justicia es un acto procesal complejo, compuesto por una serie de actuaciones digitales concatenadas entre sí, que se inician con la creación de una carpeta digital en la que se deben ingresar, para una correcta tramitación de la causa, los antecedentes relativos al tipo de procedimiento, la materia, los antecedentes de todos los litigantes involucrados, para, posteriormente y una vez creada dicha carpeta, proceder al ingreso de la demanda y de los documentos que en ella se acompañan.

Octavo: Que resulta manifiesto, conforme a lo que ha sido hasta aquí el relato de los antecedentes del proceso, que el cuestionamiento que el recurso realiza al actuar de los recurridos se encuentra destinado a desvirtuar aquel requisito en que se sustenta esta sanción procesal, relativo a calificar al demandante como un sujeto procesal inactivo, al haber interpuesto la demanda fuera del plazo contemplado en el artículo 168 del estatuto laboral.

Noveno: Que, conforme a lo que se ha venido razonando, no puede imputarse a la parte demandante una inactividad o abstención respecto de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados, pues la actividad que desplegó, descrita en la motivación cuarta, numeral III, y ratificada por la información aportada por la Mesa de Ayuda de la Ley de Tramitación Electrónica, consistente en proceder a la creación en la Oficina Judicial Virtual de 31 carpetas digitales entre los días 28 y 29 de febrero de 2024, entre las que se encontraba aquella vinculada a la presente causa, iniciando en dichas fechas el ingreso al sistema de los antecedentes del tipo de procedimiento, materia y litigantes, para luego realizar el proceso de ingreso del escrito de demanda el 1 de marzo de 2024, a las 23:55 horas, muestra un accionar proclive a la realización de gestiones que suponen el ejercicio del derecho a reclamar por la conducta del empleador determinante de la finalización de la vinculación, independiente que el proceso haya finalizado con algunos minutos de retraso.

Debe recordarse que esta sanción procesal pretende, en un caso como el de autos, otorgar certeza a las relaciones jurídicas entre empleadores y



trabajadores y, específicamente, a su terminación, con el establecimiento de las subsecuentes indemnizaciones en el caso que resulten procedentes. Dentro de este concepto de certeza, la actividad del trabajador demostrativa de su interés, se evidencia por la realización de una gestión que indubitadamente suponga el ejercicio del derecho a reclamar por la conducta del empleador determinante de la finalización de la vinculación, y tal gestión no puede ser otra, acatando la disposición contenida en el inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo, que “recorrir al juzgado competente” para que ordene el pago de las indemnizaciones respectivas, lo que, en definitiva, ocurrió dentro del plazo contemplado en el precepto legal antes referido.

Décimo: Que de lo razonado fluye que, al haber iniciado el apoderado de los actores el proceso digital de creación de la carpeta digital entre los días 28 y 29 de febrero de 2024, para, posteriormente, iniciar el envío de los antecedentes a las 23:55 del día 1 de marzo del mismo año, culminando el proceso a las 00:14:13 del día 2 de marzo del mismo año, debe entenderse que, constituyendo el de la especie un trámite -el de ingreso de una acción- que no se agota en un solo paso, que es de carácter complejo por requerir más de una gestión en la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, han recurrido ante el tribunal respectivo dentro del plazo previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo.

En consecuencia, como la caducidad es una sanción de carácter procesal que debe aplicarse al litigante que se abstiene de manifestar su voluntad dentro del término legal en orden a que se le reconozcan determinados derechos que afirma vulnerados; y en este caso, tal voluntad fue exteriorizada al iniciar el proceso de creación de la carpeta digital y el envío de la demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo, se debe colegir que no correspondía declarar la caducidad, y al no entenderlo así, los recurridos cometieron falta grave que debe ser enmendada por la presente vía.

Undécimo: Que, asimismo, no es posible soslayar que, de acuerdo al mérito de los antecedentes que se deprenden del proceso, habiéndose interpuesto 31 demandas por parte del abogado de la parte recurrente el día 1 de marzo de 2024, existiendo actualmente nueve de ellas en tramitación al haberse acogido el incidente de entorpecimiento fundado en los mismos antecedentes del presente recurso, la decisión de desestimar la caducidad se encuentra en armonía con los principios de igualdad ante la ley y el derecho de acceso a la justicia, respecto de todos aquellos trabajadores representados por el mismo apoderado.

Duodécimo: Que, por último, uno de los intereses que debe ser protegido y útil a la resolución que acá debe ser adoptada, dice relación con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus



derechos, también conocido en la doctrina moderna como derecho a la tutela judicial efectiva, asegurado por el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, aunque no esté designado expresamente en su texto escrito, carecería de sentido que se hubiese esmerado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, el derecho a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico para su vigencia, esto es, *el derecho de toda persona a ser juzgada*, esto es, a presentarse ante el juez, a ocurrir ante él, sin estorbos o condiciones que se lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente.

En el actual estado de desarrollo del derecho nacional e interpretando la garantía constitucional de acceso a la justicia con un criterio finalista, amplio y garantista, cualquier limitación por vía de interpretación que obste al derecho a la tutela judicial, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Decimotercero: Que, de esta forma, la conclusión a la que arribaron los recurridos, esto es, confirmar la resolución que declaró la caducidad de la acción por despido injustificado, aparece que fue fruto de una interpretación que no respetó el debido proceso, en su arista referida al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que lleva a concluir que se privó a la parte demandante de la potestad de reclamar ante la sede jurisdiccional competente y en un procedimiento que le asegure la posibilidad de pedir, afirmar y probar sus pretensiones y derechos que estima vulnerados, razón por la que se acogerá el recurso de queja en los términos que se indicarán.

Lo dicho con anterioridad no libera al apoderado de la parte demandante, en casos futuros, de procurar la culminación de la totalidad del proceso de ingreso y envío de demandas y escritos en forma oportuna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se **acoge** el recurso de queja deducido por el abogado don Mauricio Chocair Triviño, por el demandante don Patricio David Padilla Bernal y, en consecuencia, se dejan sin efecto las sentencias de cuatro de junio de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el ingreso N° 1241-2024 y aquella dictada con fecha trece de marzo último por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, en los autos Rol O-1522-2024, en cuanto declararon la caducidad de la acción de despido injustificado presentada, y en su lugar **se dispone** que el tribunal de la instancia



dará curso a la tramitación de la demanda deducida, de conformidad al procedimiento establecido por la ley.

Acordada con el **voto en contra** de los ministros **Sr. Carroza y Sr. Simpértigue**, quienes estuvieron por desestimar el recurso de queja, teniendo únicamente presente que no aparece evidenciada la falta o abuso que se invoca y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, el recurso gira en torno a la valoración que la judicatura del fondo realizó respecto del artículo 168 del Código del Trabajo en relación con las normas de la Ley N° 20.886, cuestión que no es susceptible de ser atacada a través de esta vía, pues, tal como se ha dicho reiteradamente, el proceso de valoración probatoria e interpretación de la ley que llevan a cabo los tribunales de justicia en cumplimiento de su cometido, no es susceptible de ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de éstos, a menos que en dicho proceso se advierta, de forma manifiesta, un razonamiento abusivo o que atente contra las reglas del buen uso de la razón en la construcción de los argumentos interpretativos, lo que no se verifica en la especie.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Tribunal Pleno, por tratarse de un asunto en que la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que lo amerite.

Regístrese, comuníquese y hecho, archívese.

N° 19.738-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Mario Carroza E., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpértigue L., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G. No firman los ministros señora Gajardo y señor Simpértigue, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos con permiso. Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

MARIO RONALDO CARROZA
ESPINOSA
MINISTRO
Fecha: 17/09/2024 12:25:58

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/09/2024 12:20:57



FABIOLA ESTHER LATHROP GOMEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 17/09/2024 12:23:28



En Santiago, a diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

